

CRISIS ECONOMICA Y ALTERNATIVA AL SOCIALISMO

La ruptura democrática, la vieja ruptura democrática ha triunfado, está triunfando plenamente. La continuidad franquista ha quedado quebrada en los resultados electorales del 15 de junio con el voto masivo por el cambio político y mayoritario por aquellas opciones que representan el cambio de las estructuras del país. Sin embargo, la Ley Electoral ha cumplido su misión impidiendo que la ruptura traspase el umbral de la pura política al reducir a minoría parlamentaria la mayoría popular.

Como era esperado, la ruptura de la continuidad franquista está permitiendo ya la introducción de correctores en el sistema económico. El Gobierno se dispone a reorientar la economía, a dictar medidas y disposiciones de política económica que permitan estabilizar y reordenar las variables económicas desajustadas: paro, inflación, estancamiento y déficit exterior, en un sistema económico que como el español está definido por el "libre mercado" y en el cual la inversión se realiza para obtener una tasa esperada de ganancia sobre el capital invertido. Es el sistema denominado capitalista, y en este marco la ruptura significa hoy para la economía, precisamente el que el equipo gobernante pueda encontrarse en situación de aplicar las medidas técnicas de política económica —entre las que se encuentran no pocas actuaciones de índole institucional— que de acuerdo con su criterio ideológico considera necesarias para salvaguardar los intereses generales del sistema económico. Sería demagógico, en consecuencia, criticar las acciones del Gobierno desde posiciones exteriores al capitalismo —es decir, socialistas— y absurdo exigir del Gobierno la transformación de las estructuras económicas del país.

La defensa del sistema

El Gobierno intenta hoy salvaguardar los intereses del sistema mientras que sus antecesores franquistas no pretendieron nunca salvaguardar más que los

intereses de las camarillas políticas del régimen al que servían. Este cambio es ya un síntoma de ruptura democrática y plantea cuestiones de interés relevante a las fuerzas políticas socialistas y a las organizaciones sindicales:

El capitalismo español ha adquirido coherencia con la democracia. Está adquiriendo coherencia técnica e institucional. Antes, cuando la dictadura definía el "régimen", la oposición democrática exigía coherencia a los dictados para poner así de manifiesto la incapacidad gubernamental de representar, incluso, los intereses que debía defender. Era importante reducir el franquismo a un "bunker", aislarlo de sus propias bases sociales. Entonces el socialismo no era la alternativa inmediata. La alternativa era la democracia. Pero, ¿sigue siendo hoy la democracia la alternativa política de las fuerzas sindicales y socialistas? La respuesta a este interrogante ha de condicionar bastante la acción sindical de las fuerzas políticas socialistas del país.

Es evidente que la economía está en crisis, y que esto en España quiere decir básicamente que las expectativas de los empresarios son en parte negativas e inexistentes en sectores económicos importantes, que las esperanzas de obtener una tasa de ganancia normal en las actividades inversoras son muy débiles en zonas fundamentales de la economía, que el equilibrio dinámico de la economía tiende a desaparecer con el desajuste de sus piezas básicas. Es evidente, en fin, que la situación de crisis empezará a superarse sólo si se restablece el motivo por el cual los empresarios invierten: la tasa de ganancia. Esta es la lógica del capitalismo. Es una lógica cuestionable. Cuestionemos, pues, el capitalismo.

Desconocer las leyes que rigen la economía de mercado, desarrollar reivindicaciones inasimilables en el momento actual de crisis, conducir, en definitiva, el movimiento obrero a un enfrentamiento frontal con la lógica interna del capitalismo, sin cuestionar por ello y a pesar de todo el sistema, sería entablar una lucha estéril, tal vez, que tendería a pudrir la crisis sin que

JORGE FABRA

podiera garantizarse con ello, de ninguna manera, un desenlace final favorable a los trabajadores. El capitalismo posee su propia coherencia y esa coherencia ha superado muchas pruebas en la Historia y se ha hecho notablemente resistente. Discutir las medidas económicas y las reformas que se dicten debe llevar a denunciar el capitalismo en su propia razón de ser un sistema económico y social, no a proponer otras medidas, otras reformas que tan sólo contradigan la lógica del sistema sin apuntar hacia soluciones de fondo.

Las medidas adoptadas por el Gobierno pretenden restablecer la confianza empresarial del país: devaluar implica para España aceptar el sistema internacional de precios relativos, desfigurado por la mayor aceleración inflacionista verificada en nues-

tro país —a un español le costará ahora lo mismo, en términos de poder adquisitivo, comprar un kilo de pan en España que en el extranjero—. El país se acercará más a la realidad de su capacidad de compra tras la devaluación adoptada. Racionalizar la fiscalidad implica hoy dotar al gasto público de capacidad para distribuir recursos reales entre los diferentes sectores de consumo e inversión con criterios de justicia distributiva y eficacia económica. Desarrollar una política de rentas contribuirá, en fin, a detener la componente de costes que más directamente afecta al beneficio como margen de la actividad empresarial. Se trata, pues, de equilibrar el sector exterior de la economía, de restablecer las relaciones intersectoriales con la adecuada jerarquía económica de cada sector, de salvar de manera inmediata el balón de oxígeno del beneficio para intentar que a plazo medio el sistema económico funcione. Y esto significa irremediablemente que el paro aumentará de aquí a medio plazo, que la inflación mantendrá sus ritmos a medio plazo, que el poder adquisitivo de los salarios disminuirá de aquí a medio plazo hasta que el capitalismo supere la crisis. Este es el coste social que intentará cargarse sobre la cuenta de los





Las fuerzas sociales concurrentes deben ahora poner precio a su participación en el compromiso, y ese debe ser un precio político que permita a los trabajadores conquistar y construir plataformas de lucha por el socialismo.

trabajadores y que nunca deberá ser imputado a las medidas —acertadas o desacertadas— que adopte el Gobierno, sino al sistema económico que el Gobierno pretende salvaguardar. Y es lógico que el Gobierno pretenda tal cosa. Pedirle algo diferente sería pueril.

La alternativa socialista

La alternativa, hoy, no es la democracia porque el sistema es democrático. La alternativa es el socialismo porque el sistema es capitalista. Consolidar y profundizar la democracia en una perspectiva socialista son las tareas actuales de las fuerzas socialistas y sindicales en estos momentos de crisis.

Los trabajadores están interesados como clase en la superación de la crisis por dos razones básicas entre muchas otras: primero, porque su agudización comportaría un deterioro adicional de las condiciones materiales en la vida de los trabajadores en una situación carente de perspectivas, o al menos con perspectivas desoladoramente confusas. Y segundo, porque la perpetuación de la situación de crisis y su consiguiente profundización crearía una nueva situación extraordinariamente inestable, óptima para que pudiera cuajar el más descabellado intento de involución política. Estas son, desde luego, razones de indudable peso para que la situación de crisis de la economía y sus características no sean ignoradas por las centrales sindicales. Sin embargo, las razones del conjunto de los empresarios como clase, de la burguesía poseedora, son todavía más poderosas. Son

cualitativamente más poderosas. La crisis económica es la crisis del funcionamiento de su sistema económico. Es su crisis. Una crisis que atenta contra la misma razón de ser empresario, el empresario. Contra el excedente de explotación. La quiebra de miles de empresas se encontraría en el camino que recorrería la crisis. La concentración más exacerbada de la propiedad. La dependencia tecnológica y económica. La aceleración, también sin perspectivas, del proceso de empobrecimiento del capitalismo nacional en suma, que amenazaría la debilidad individual de cada uno de los empresarios hasta su desaparición por quiebra. Todo es una hipótesis vulgar para una crisis más aguda, que sin duda trabajará contra la posibilidad de perpetuación de la propia crisis en la mente y la esperanza de los empresarios de este país.

Sin embargo, el cambio de las estructuras sociales y económicas no llegará por vías distintas a las que se encuentran en la voluntad de las gentes. No se producirá por vías sorprendentes, casuales o inesperadas. No llegará de la mano de una crisis no deseada, no buscada, producto del mal hacer de Gobiernos enteros, de la corrupción o de leyes económicas objetivas que existen —se quiera o no se quiera— como existía la gravedad antes de Newton. El cambio económico y social, la superación del capitalismo como sistema, llegará por la vía de la acción política y sindical. Por la reivindicación del socialismo como sistema económico, social y político de la inmensa mayoría, por la mayoría. Y si la crisis es necesario superarla es, justamente, para que la

acción política pueda trabajar con eficacia, pueda transformar.

Existe, pues, una convergencia de intereses para superar la crisis. Las bases objetivas para el establecimiento de un compromiso están dadas. Las fuerzas sociales concurrentes deben ahora poner precio a su participación en el compromiso. Y si la alternativa es para los trabajadores, hoy, el socialismo, el precio de su participación debe ser un precio político que permita a los trabajadores conquistar y construir plataformas de lucha por el socialismo. Alcanzada ya la democracia, la estrategia concreta hacia el socialismo debe comenzar. Va a ser un camino lento que debe estabilizar y consolidar las conquistas democráticas, que debe profundizar la democracia con nuevos avances en el seno de la empresa, de los municipios, de las diputaciones, de las regiones, de las nacionalidades. Que debe empezar a construir la alternativa desde las bases del poder económico y administrativo. Este podría ser el contenido de la acción sindical y política de las fuerzas socialistas del país: la política del compromiso desde la fábrica hasta el Estado al precio caro del avance hacia el socialismo. He aquí el reto que debería ser plantado ante quienes desde el Gobierno y la empresa quieren un capitalismo moderno para España.

Sindicatos y alternativa

La práctica durante decenios de una lucha sindical elemental en el terrible marco de la dictadura, de la clandestinidad; la actividad reivindicativa para lo-

grar el bienestar de una población mísera, para dotar de conciencia histórica, política, sindical y social a la clase obrera; la enorme necesidad de recuperación del movimiento obrero han marcado a las centrales sindicales de una inercia que puede ser fatal: el obrerismo reivindicativo, en la etapa histórica que ahora se inicia. Es función de los sindicatos introducir en la conciencia más profunda de su afiliación la idea de poder, de gestión, de capacidad de elaborar alternativas obreras a lo instituido. Es necesario incorporar a la alternativa socialista los sectores asalariados más dinámicos y capacitados que, sin duda, comprenden desde las primeras cualificaciones profesionales hasta los técnicos asalariados de mayores niveles de renta y consumo; incorporarles en su papel irremplazable de cuadros para la gestión socialista.

Las reivindicaciones económicas, los planteamientos salariales debieran reducir su rango de "no negociabilidad" al de "negociabilidad" en el conjunto de un fuerte paquete de replanteamientos de las condiciones del trabajo en la empresa (control de la productividad, de la jornada laboral, de las horas extraordinarias, etcétera), de prestaciones sociales tales como el transporte, los comedores o las guarderías, que debieran arrojar la reivindicación fundamental de controlar la gestión de la empresa a través de comités de trabajadores contemplados por la ley. Esta sería una gran conquista y, sin duda, un avance institucional de trascendencia para los objetivos del movimiento obrero. Su funcionamiento estaría coordinado por las secciones sindicales de cada sector económico. Las centrales se verían así dotadas de un conocimiento y de un control sobre la actividad y desarrollo de las empresas capaz de servir de base a planteamientos alternativos posteriores para cada sector y, en su marco, para cada empresa. El sector público constituiría, tal vez, el núcleo de las primeras experiencias de control democrático de la gestión, el primer sector económico dispuesto a pagar a buen precio la participación del movimiento obrero en la política de compromiso.

Un "código de los derechos de los trabajadores", que las centrales sindicales concretarían a nivel de empresa, completaría el alto precio que el movimiento obrero está en situación de exigir a quienes con él necesitan superar la crisis de este país. Pocos caminos más existen en España para el socialismo. Es necesario empezar a andarlos ya. ■